

Nacionalismos periféricos y democracia en España

DOMINGO GARÍ HAYEK*

*Departamento de Ciencias Históricas, Área de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos, ULPGC.

La crisis del régimen franquista coincidió con una etapa de grandes transformaciones en los niveles estructurales del sistema capitalista. Las profundas esperanzas abiertas con las revoluciones del sesenta y ocho marcaron el inicio de una nueva época histórica, a la que siguieron fenómenos de gran trascendencia para el ámbito de la economía, la política y la sociedad en su conjunto. Crisis financiera de 1971. Crisis energética de 1973. Pérdida de la centralidad del movimiento obrero. Cuestionamiento del papel de los Estados tal y como habían permanecido hasta la fecha. Auge del sector financiero y monetarista del capitalismo. Crisis del *Welfare State*. Grandes agrupaciones regionales de carácter económico, especialmente en el caso europeo. Aparición de viejos y nuevos nacionalismos subestatales. Nuevos movimientos sociales de carácter reivindicativo: ecologismo, pacifismo, antimilitarismo, movimientos de liberación sexual –gays, lesbianas–.

No es posible estudiar todo esto aquí, sin embargo, es preciso tenerlo presente. Me interesa, como hilo conductor de este discurso, el papel de los nacionalismos en la reestructuración del Estado durante el periodo democrático. Ahora bien, para explicarlo abarcando toda su dimensión, no se puede dejar de lado la cuestión de la centralidad del movimiento obrero. Llegamos, así de temprano, a las sugerencias que pretendo esbozar en estas líneas. Los nacionalismos que rebrotan en España desde el periodo de la pretransición hasta la actualidad se encuentran insertos en la nueva fenomenología política derivada de los acontecimientos que acabo de citar. Aunque a la vez puedan presentar, en algunos casos, manifestaciones propias de los nacionalismos decimonónicos. No obstante, este aspecto lo considero secundario y, por lo tanto marginal, en la amplia lista de elementos diversos que definen el proyecto político nacionalista.

Otra consideración previa. No vamos a

hablar aquí de nación o naciones, ni a perdernos en las disquisiciones definitorias que de ella se suelen hacer. No me interesa el fenómeno sociológico, que por otra parte, a lo mejor, es lo único importante, sino el fenómeno político. De ahí que lo central de este discurso gire sobre el problema del poder y de su articulación sobre la sociedad. Proposición: vamos a hablar de nacionalismos y no de naciones. Resultado: luego, las reflexiones pivotarán sobre el nacionalismo español, catalán, vasco, canario y gallego. No hay conclusión posible, sí líneas demarcadoras de todos con respecto a uno, es decir, del catalán, vasco, canario y gallego, respecto al español, y por supuesto, también, líneas demarcadoras en el interior de cada uno de ellos.

Última consideración. Sólo puedo trazar un ensayo de interpretación, que por otra parte puede estar más o menos contrastado en la amplia bibliografía que respalda al tema. Un trabajo que quiera ir más allá de esta intención no puede tener una limitación acotada por el tiempo y por el espacio.

1- CRISIS DEL ESTADO FRANQUISTA Y NUEVA ORDENACIÓN DEL PODER

Desde el punto de vista que me interesa resaltar es importante advertir que la crisis del estado franquista, no sólo indica la fecha de caducidad de un régimen autoritario, fascista, dictatorial, de democracia orgánica, o como quiera denominársele, sino que señala también el final relativo, o mejor aún, el comienzo de un final relativo de una determinada concepción de España, de su organización territorial, de la distribución del poder dentro del Estado, y en suma, de una variante específica del nacionalismo español, que por lo demás ha sido dominante durante varios siglos, con la excepción de pequeños periodos que pretendieron reordenar el po-

der sobre otros criterios. Estos contados casos son la I República, la II República y los años que llevamos de democracia en la actualidad.

Las cuatro décadas de permanencia de Franco en el poder apuntalaron con mucha firmeza el nacionalismo estatal, o en otras palabras, el nacionalismo español. Pero este nacionalismo se asienta sobre la negación del resto de nacionalismos que con mayor o menor intensidad se manifiestan en determinados territorios del Estado. De entre ellos, los casos más notables son los representados por el nacionalismo catalán y el vasco, en mucha menor medida el gallego y como otra variante temporal y espacial, el canario. Cada uno de ellos ha sido producto de una evolución histórica determinada y tienen una inserción en sus territorios de distinto grado, amplitud y formas de manifestación.

El nacionalismo español de forma frecuente se ha identificado con los modelos antidemocráticos que tanta importancia han tenido en la historia de España. Y aunque todo eso tenga razones de mucho peso para haber sido así, no sería de justicia dejar de reconocer la existencia de otro tipo de nacionalismo español compatible con las formas políticas de la democracia liberal, y aún más allá, incluso otro nacionalismo español emergido del seno de las formaciones políticas de la izquierda –socialistas, comunistas– aunque estos hayan tenido mucho menor prensa que los anteriores.

Pero en el caso español, el pensamiento ha caminado durante mucho tiempo por senderos distintos a los de la política. Y dentro del ámbito de los pensadores tampoco existe una sistematicidad sobre el problema nacional más allá de discursos moralizantes o excesivamente vagos sobre una ordenación alternativa del poder. Desde Unamuno hasta Ortega o de Araquistáin a Costas las reflexiones en torno a esta problemática no pasaron de ser cosmovisiones genéricas sobre el problema de Es-

paña, el alma de España y cosas por el estilo. Por otra parte, cuando las izquierdas tuvieron la oportunidad de intervenir en el asunto fue poco el tiempo del que dispusieron para hacerlo, aunque el suficiente como para hoy poder advertir que los ensayos de reorganización del poder que intentaron siempre aspiraron al modelo federalizante. De esta forma, federalismo e izquierda nos suenan casi como conceptos análogos. En la actualidad, en este sentido las cosas siguen siendo similares. IU es la gran defensora del modelo federal y desde el PSOE muchas veces se suelen soltar globos sondas en esa dirección. Sin embargo, este modelo federal parece no ser del agrado de las fuerzas políticas de corte nacionalista, tanto de derechas como de izquierdas y acusan a aquél de haberse convertido en la nueva manifestación del nacionalismo centralista español.

El desarrollismo de los años sesenta abrió un nuevo horizonte para la política en el conjunto del Estado, aunque siempre de forma asimétrica. No impactó de igual manera el cambio sociológico de la década en Cataluña que en Extremadura, en Galicia que en Canarias. En unos lugares más que en otros la apertura de nuevos espacios de intervención política tuvo mucho que ver con el bagaje tradicional de organización y con la incidencia en mayor o menor medida de los nuevos sujetos sociales que irrumpieron en la arena de la economía y de la organización frente a ésta.

El acelerado proceso de industrialización transformó la estructura agraria y atrasada del país, y desarrolló, por tanto, a los nuevos sujetos actuantes que luego serían los protagonistas del proceso de transición. De forma especial el turismo jugó un papel dinamizador de las estructura social al convertirse en uno de los principales protagonistas del cambio de mentalidad ocurrido en la época. El trasiego de personas a uno y otro lado de los Pirineos trajo consigo nuevas formas de entender la vida y nuevas experiencias de lucha que co-

menzaban a verificarse en esos momentos en el conjunto de los países democráticos y no democráticos de Europa. Fue un duro revés para el inmovilismo del régimen. Paralelamente, en el interior la pulsión de la sociedad abrió nuevos canales de intervención política, entre los que hay que destacar el fenómeno nacionalista, despojado ya en muchas de sus vertientes de los viejos modelos existentes.

Con el final del franquismo entra en crisis una modalidad del nacionalismo español, pero no el nacionalismo español. Las fuerzas políticas que sustituyen en el poder al viejo régimen comparten muchos de los puntos de vista que éste sostenía sobre esta cuestión. De hecho, quienes participan desde el estado central en la elaboración del nuevo modelo de estado son personas vinculadas directamente al régimen que desaparece. El diseño constitucional sobre el asunto, en su momento no fue capaz de consensuar el nuevo modelo con todos los nacionalismos periféricos. Ni aún con el nacionalismo de corte cristiano-demócrata como el representado por el PNV. Sí lo logró en cambio, con el nacionalismo de derechas de Cataluña, porque en mi opinión estos tenían más decidida su forma de participación en el nuevo Estado. Sin embargo, en todo el proceso constituyente y posterior a él, la tensión entre los nacionalismos periféricos y el español continúa, aunque ahora, en este último participan los partidos mayoritarios de la izquierda parlamentaria. En este sentido, la pretensión de aplicación de la LOAPA estimuló el rechazo frontal de los nacionalistas catalanes al hacer de ella una lectura neocentralista. Desde Convergencia Democrática de Catalunya se entendió que la puesta en práctica de esa ley pretendía rebajar, vía modelo federalizante, las competencias adquiridas por las comunidades autónomas. "Roca recordará que al elaborarse la LOAPA ya se habló de una 'lectura federalista' de la Constitución, en la línea de las técnicas del federalismo cooperativo de tipo alemán

occidental. En la tradición catalanista el federalismo siempre se entendió como solución para articular las relaciones entre las cuatro naciones del Estado español. Si no se trata de esa concreción, CDC estima peligroso intentar reconvertir el Estado de las Autonomías en 'federal', ya que esto sólo serviría para recortar competencias y uniformar a la baja a las CC.AA.". Sería una nueva tentativa de poner en práctica el modelo de "café para todos" que el proyecto Clavero había defendido en el proceso constituyente. Por eso la formación política que lidera Pujol opinaba que la única posibilidad de éxito que podría tener el modelo federal en España era si este se ajustaba a servir de marco sólo para las cuatro naciones que componen el Estado. En otras palabras, modelo federal, siempre y cuando se establezca entre Catalunya, Euskadi, Galicia y España. De no ser así estiman necesario continuar el desarrollo estatutario de las Comunidades Autónomas.

En parecidos términos de rechazo se manifiesta el nacionalismo vasco moderado representado por el PNV, al considerar a la LOAPA como un intento de involución del gobierno central en el tema autonómico. "El día 8 de Octubre de 1981 comienza un pleno monográfico del Parlamento Autónomo Vasco sobre el tema de la LOAPA en el cual ... detienen en síntesis que el Estatuto no es una ley otorgada por el poder central, sino que deriva de la voluntad popular vasca"².

En el caso gallego y canario la historia fue por otros derroteros. En ninguno de estos dos territorios existía una burguesía que estuviese organizada de forma autónoma en partidos nacionalistas, más bien a la inversa, formaban parte de la UCD, partido que junto con el PSOE fue el principal impulsor de esa Ley. Mención aparte merecen los nacionalismos de izquierda de Canarias y Galicia, que junto con el vasco y el catalán se opusieron desde el principio a todo el proceso de ordenación autonómi-

ca del Estado, por considerarlo insuficiente y negador de los derechos nacionales.

La llegada de la democracia, en lo que se refiere a la cuestión nacional, abrió la posibilidad para que los diversos nacionalismos se expresasen en un marco de legalidad, exceptuando, claro está, la modalidad ETA y las otras modalidades armadas. El nacionalismo español comienza a tirar de su tradición liberal en oposición a la tradición autoritaria que había dominado las últimas décadas. No va a ser un trabajo fácil el que tenga que realizar aún en la actualidad, para hacerle ver a los nacionales no españoles su cambio de talante y actitud. Aunque en el terreno de la política el dominio de lo prosaico emerja sobre el resto de campos.

La reconstrucción del Estado a lo largo del proceso de transición política, en esencia, es impulsada desde dentro de los aparatos del Estado, en el que domina de forma absoluta el nacionalismo español, aunque bien es verdad que ello se hace en consenso con los líderes de las fuerzas políticas de la oposición, incluidas las nacionalistas no españolas de derechas.

El proceso vivido a lo largo de la década de los setenta es rico en acontecimientos. Los primeros pactos de contenido real fueron los de la Moncloa. La lectura de este Pacto tiene una doble dimensión. Por un lado, destaca su carácter preconstituyente, es decir, político, al diseñar las grandes líneas maestras sobre el modelo de sociedad al que se aspira. En síntesis, el Estado del bienestar en una modalidad disminuida, pero homologable al resto de la países de la Europa Occidental. Por otro lado, ataca el problema de la crisis económica que azota desde 1973, y lo hace desde dos ángulos: en primer lugar, se despliega una política de contención salarial; y en segundo lugar, flexibiliza las condiciones de contratación, dando entrada así a los primeros contratos de duración limitada³.

Desde abril de 1977, la constitución de una organización como la CEOE apunta la

línea que pretenden seguir los patronos españoles, y ese mismo mes la legalización del PCE restablece el equilibrio para el funcionamiento normalizado de la democracia parlamentaria. Las diferentes intentonas golpistas a lo largo de 1977, 1978, etc, son frenadas con cierta debilidad por el gobierno Suárez, y por último, el 23 de Febrero de 1981 se diseña de nuevo el proceso de transición, tras el intento de golpe de estado, y en un claro proceso de involución los militares y el poder civil pactan un acuerdo de Estado que alcanza hasta nuestros días, y que por lo que se refiere a la problemática nacional antepone ante cualquier nuevo diseño que se pretenda en la reorganización territorial del Estado la "incuestionable unidad de la patria"⁴. Los efectos del 23 de Febrero, si bien sirven para tensar, por un lado, las relaciones entre las derechas nacionalistas y el poder central –caso LOAPA– sirven, por otro lado, para buscar puntos de encuentro en otras áreas de la política estratégica, y así vemos cómo en "el pleno del Congreso de los días 27 a 29 de Octubre, una mayoría absoluta, compuesta no sólo por UCD y AP, sino también por la minoría catalana y el PNV, vota a favor del ingreso ... de España en la OTAN"⁵.

La llegada del PSOE al poder, ciertamente va a significar una transformación de la realidad socio-económica. Las sucesivas políticas de corte neoliberal que impulsa el gobierno González contienen dos significaciones estructurales. Por un lado, refuerzan el papel del capital financiero y especulativo y debilita los centros productivos tradicionales, mediante las políticas de reconversión industrial, y por otra parte, desarman como consecuencia de esa medida –y de otras– la capacidad organizativa y combativa de la clase obrera ligada a esos sectores de la economía.

Estas dos líneas estratégicas de la política económica del gobierno socialdemócrata responden a las exigencias de la incorporación del Estado español a la CEE y

a los intereses del capital internacional, es decir, pertenecen a la nueva reorganización en la división internacional del trabajo que se pone en marcha desde el comienzo de la crisis energética de 1973.

La estructuración del Estado de las Autonomías, hegemonizada por las fuerzas políticas del *pacto constitucional* –nacionalistas españoles y nacionalistas catalanes– más el PNV, que se suma plenamente al proyecto una vez aprobado, en el referéndum del 1 de Marzo de 1979, el Estatuto de Gernika, va revelando una transformación de alcance histórico en el interior de las fuerzas políticas de las clases dirigentes. A partir de este momento las burguesías nacionalistas de las periferias comienzan a formar parte de forma orgánica de los nuevos aparatos de poder emanados del proceso de transición. Las Comunidades Autónomas también son *Estado*, ha repetido incansablemente Jordi Pujol cuando desde diferentes ámbitos se le ha acusado de querer debilitar el Estado. La explicación de este fenómeno habrá que buscarla en el nuevo significado que va a cobrar lo político tras las revoluciones del 68. Esta fecha encarna, el nacimiento de una nueva consideración de lo político en el capitalismo maduro. Nos referimos a la autonomía de lo político. Los acontecimientos del 68 revelan un alcance histórico, por cuanto, significan una transformación estructural del capitalismo. El 68 marca el final del *Welfare state*, desarrollado en Europa tras la Segunda Guerra Mundial, y tocado de muerte por las profundas transformaciones que sufre el mundo de la producción, dado que introduce un nuevo sujeto histórico que, citando a Toni Negri, denominamos el *obrero social*. Este fenómeno es la línea de demarcación entre los nacionalismos decimonónicos y los actuales.

Esta nueva *era*, en el desarrollo histórico del capitalismo, con un nuevo sujeto –el obrero social– en el ámbito de la producción, modifica radicalmente la relación ha-

bida hasta el momento entre las instancias económicas y las políticas.

El capitalismo de post-guerra vertebraba las relaciones de explotación en el marco de la fábrica, en el que el Estado juega un papel de cohesionador de los intereses nacionales de las distintas burguesías, aunque evidentemente bajo la hegemonía de los EEUU. A partir del período 68-73, primero con las revueltas generalizadas, el ascenso de las luchas obreras, las revoluciones en el Tercer Mundo, la crítica en los países occidentales a la calidad del desarrollo, etc., y posteriormente con la aparición de la crisis energética, condicionada ya por las nuevas políticas inflacionistas asentadas sobre políticas económicas de corte monetario, el capitalismo transmuta la base de su sustento.

Esta transformación deviene, fundamentalmente, a consecuencia de las modificaciones habidas en el mundo del trabajo, y por tanto, en el elemento que vertebraba y da cohesión y sentido al fenómeno social, a la composición social de la vida humana. El trabajo como medida de la producción y del intercambio (valor de cambio), pero también al trabajo como medida de la relación social, de la producción social de la historia y de su devenir (valor de uso). El trabajo en esta nueva revolución histórica iniciada en torno a los años sesenta se define por difundirse «indiferentemente dentro y fuera de la fábrica. Los canales de recomposición pueden ir hacia la fábrica; pueden, en cambio, presentarse a unas síntesis sociales, dentro de largas proyecciones productivas. Las escalas de producción y las integraciones de los modos de elaboración se hacen más extensas y complejas que nunca»⁶, como consecuencia se «representa un funcionamiento compacto que coordina e integra dimensiones diferentes, en sectores económicos, en mercados nacionales, y desarrolla coordinación e integración multinacional sobre la totalidad de la faz del globo»⁷. El sujeto

histórico resultante de esa nueva relación en el mundo del trabajo se encuentra «inserto en redes formidables de cooperación. El obrero social comienza pues a configurarse dentro de ese paso»⁹.

Los procesos de automatización –aplicados a la producción– generados por el desarrollo industrial están, sin duda, en la base de este cambio histórico. El tiempo de trabajo deja de ser la fuente principal de medida de la riqueza. El trabajo inmediato, merced a las nuevas condiciones impuestas por la informática y la robótica deja de ser el centro del proceso, y por lo tanto, no es el marco de la fábrica –como concepto abstracto (general)– el lugar en el que se ventilan las contradicciones. El sujeto histórico que aparece ahora vive y se desarrolla en el marco general de la sociedad.

Este estado de cosas, en esencia, dibuja una nueva significación del elemento político como sujeto relativamente autónomo en el marco del capitalismo. Determinadas funciones económicas y sociales son asumidas por los estados capitalistas y esto no hay que entenderlo como un triunfo del Estado del bienestar diseñado por la socialdemocracia⁹. El papel central del Estado, de la forma política de dominación que asume el capital, consiste básicamente en coordinar y dar cierta racionalidad al mismo sistema, que de otra manera se vería abocado a un enfrentamiento de dimensiones incalculables con las masas populares. Con esto quiero plantear que determinadas conquistas llevadas a cabo por las luchas de las clases populares, en los estados del capitalismo maduro, no pueden ser echadas por tierra sólo por la acción del capital, sin la participación del Estado, porque en ese caso se podría generar una situación revolucionaria –piénsese en la sanidad y en la educación pública, etc–. Otra cosa es que el Estado actúe, sobre todo en los momentos de crisis, vaciando de contenido esas conquistas sociales, pero no las su-

prime de forma tajante, mantiene, por lo menos su aspecto formal. Esto es una forma de intervención de lo político propia de los estados capitalistas en fase monopolista.

Esta autonomía de lo político que comentamos no ha de entenderse como parte de una concepción instrumental del Estado. Todo lo contrario. La dinámica del Estado es concomitante con la del capital: desde las funciones de acumulación a las del sistema monetario; desde la legislación sobre las fábricas a la organización del trabajo cotidiano. La reproducción social del capital está cada vez más integrada y comandada por el Estado. La «autonomía de lo político» hay que entenderla entonces, como un elemento concomitante, estructural, del desarrollo capitalista, es decir del nivel de reproducción del capital social, y no como un nivel intermedio entre éste y las fuerzas productivas. El Estado es desde esta óptica el capitalista colectivo¹⁰.

Pero esta forma no desvirtúa, ni mucho menos, la presencia de las luchas políticas en el seno de los aparatos de Estado, no sólo la que viene atravesada por las luchas de clases, sino también y es el momento que nos interesa ahora, la lucha que se establece por el poder político entre los diferentes sectores de la burguesía que pertenecen a un mismo Estado.

El carácter multinacional del capital obliga a que las burguesías, tanto centrales como periféricas, dentro de un mismo Estado, se vean en la necesidad de adoptar posturas de tipo político para insertarse de manera ventajosa en las negociaciones a las que se ven abocadas con ese capital. En este sentido, la utilización del elemento político se convierte en pieza clave para el proceso de intermediación económica a que aspiran estas clases dirigentes. Dotarse de aparatos políticos «estatales» o «cuasi estatales» es una condición necesaria para contrarrestar la hegemonía de las clases que controlan directamente los aparatos de estado del poder central.

En el desarrollo actual del capitalismo, se ha producido una transformación radical del concepto de «viabilidad» por lo que se refiere a la construcción estatal. Un Estado, ahora, no es sólo «viable» por la capacidad productiva interna que tiene, como había sucedido hasta la fecha, puede ser viable también –sin tener capacidad de producción de valores de cambios y sin tener mercado nacional estructurado– si está ubicado en un punto privilegiado de la circulación de capitales, si está inserto estratégicamente en algún punto de la red de la economía mundo, en un punto de interés de las multinacionales. Se trata de explotar la renta de situación.

Pero también es viable un enfoque de desarrollo económico y de poder político que no tiene por qué tener en cuenta, de forma prioritaria el problema de la construcción estatal en su acepción clásica, aunque también es posible. La infraestructura productiva mundial, constituida sobre los flujos de información, es capaz de atender la demanda de desarrollo regional –hablo aquí de regional como realidad subestatal–, o simplemente urbana, de las ciudades, pasando por encima de los condicionamientos establecidos por el marco estatal. «Precisamente debido a que la economía es global, los gobiernos nacionales no tienen suficiente poder para actuar sobre los procesos funcionales que conforman sus economías y sus sociedades. Pero las ciudades y las regiones son más flexibles a la hora de adaptarse a las condiciones cambiantes de los mercados, de la tecnología y de la cultura. En realidad, tienen menos poder que los gobiernos nacionales, pero poseen una mayor capacidad de respuesta para generar proyectos de desarrollo con objetivos concretos, para negociar con compañías multinacionales, para fomentar el crecimiento de empresas endógenas pequeñas y medias y para crear las condiciones que atraerán a las nuevas fuentes de riqueza, de poder y de prestigio»¹¹.

2- LOS NACIONALISMOS COMO RESPUESTA A LA PÉRDIDA DE CENTRALIDAD DE LA CLASE OBRERA

Lo comentado hasta estos momentos subraya la respuesta que han dado las clases dirigentes españolas ante el problema de la transformación del Estado, teniendo en cuenta las manifestaciones específicas del caso español, por lo que se refiere a la presencia de distintos grupos nacionales en la conformación del nuevo aparato de poder, como a las modificaciones de alcance más general, que afectan al conjunto de países del entorno.

Pero el comportamiento nacionalitario no es privativo de determinadas clases o grupos sociales en ninguna de las nacionalidades que componen el Estado español. Sin duda, las burguesías son el remoto enlace histórico en estos planteamientos, sobre todo en el caso español, vasco y en el catalán. Menos claro está en el caso gallego y canario.

A pesar de todo ello, de forma indudable, la fractura que se manifiesta en el terreno de la política después de la década de los setenta puso en crisis todas las formas de plasmación de la misma que venían siendo válidas, *grosso modo*, desde finales del siglo XIX. Desde el ámbito de la ideología hasta el organizativo se desarrolla un espacio de nadie que con el transcurrir del tiempo ha ido llenándose con distintos colores –violeta, verde, rojo– y propuestas de actuación que desbordan a los partidos políticos de corte clásico –crítica del trabajo, cuestionamiento de las instituciones, crítica del Estado, apatía electoral, etc.– y, por supuesto, también, un espacio en el que se instaló una nueva forma de entender el nacionalismo, que dicho sea de paso, pretendía asumir, y lo sigue pretendiendo, algunas de esas nuevas formas de reivindicación emanadas del seno de la sociedad civil y de sus movimientos de protesta más activos.

El modelo organizativo propuesto por

las formaciones políticas de la izquierda clásica, tales como el partido y el sindicato, entra en crisis en la medida en que el capital encuentra como una de las respuestas adecuadas a la crisis de los setenta un desarrollo exponencial en el ámbito de la ciencia y de la técnica aplicadas a la producción. De esta forma se logró debilitar la base social de los partidos socialistas y comunistas y sus respectivas organizaciones sindicales, desplazando así la antaño centralidad del movimiento obrero a una posición de segundo orden en el entramado socio-político.

El pico máximo de la organización fordista del trabajo se conquista en el último periodo de la sociedad industrial. Pero la misma forma de organización emanada del fordismo ha ido dando paso a otra forma de estructuración del mercado de trabajo, que denominamos postfordista. La primera estaba fundamentada sobre un alto grado de organización de la producción industrial, es decir, un perfeccionamiento complejo del sistema de producción –aplicación de los descubrimientos técnicos y científicos a la producción–, en el que se planificaban las formas de introducción de nuevas formas de producción y del control de éstas y de los intercambios. La segunda, el postfordismo, constituye la hegemonía del capital financiero frente al industrial, la hegemonía de la relación monetaria a nivel planetario bajo el paraguas de los procesos informáticos. Es un capital que se transmuta instantáneamente, que viaja de un país a otro, en segundos, un capital cada vez más deslocalizado e independiente.

Estas dos formas de organización capitalista generan sujetos obreros, proletarios, distintos. El mundo del fordismo es el del obrero masa, del obrero de la fábrica. En el mundo del postfordismo el sujeto social actuante es otro, está inserto en el conjunto de la sociedad, es “móvil, activo, creativo”, es creador de trabajo inmaterial, de saber, es un obrero socializado, es lo que he denominado el “obrero social”. Éste es el mo-

mento al que asistimos desde los años setenta. La sociedad terciaria, la del flujo del capital financiero, la de los nuevos sujetos proletarios, es la que pone en cuestión las viejas formas de organización política.

Los partidos políticos de la izquierda española como el PSOE y el PCE encuentran en esa situación un verdadero handicap para poder integrar dentro de sus coordenadas a los nuevos sectores sociales que no pertenecen ya al mundo de la fábrica. Estos se encuentran ahora más próximos a otro tipo de organización social o política. En el primer caso, destaca el mundo del ecologismo y del pacifismo como crítica de los modelos de desarrollo imperantes, en el segundo, el mundo del nacionalismo, por lo que tiene de rechazo a las estructuras estatales y de vinculación a las nuevas y viejas clases dominantes, entre las que identifican a las cúpulas de los partidos políticos tradicionales, sean estos de izquierda o de derechas.

Los movimientos de la izquierda nacionalista, tanto en Cataluña, como en Euzkadi, en Galicia o en Canarias, en el periodo que comprenden los años de la transición a la democracia en España, tienen muchos elementos en común y otros, por supuesto, específicos de cada uno de ellos. Aquí interesa resaltar los puntos de encuentro. A grandes rasgos podemos decir que, de una forma u otra, son herederos de las situaciones revolucionarias abiertas en la década de los sesenta. ¿En qué territorio no se intentó practicar la lucha armada de carácter urbano?, ¿quiénes no estaban influenciados, aunque fuese de lejos por la figura del Che y de la revolución cubana?, ¿hubo alguno que no viviese con entusiasmo las victorias guerrilleras en Argelia, Vietnam, etc.?, ¿en algún lugar dejaron de surgir movimientos que se proclamaban prosoviéticos o prochinos cuando aconteció la ruptura de estos dos países?, y entre ellos mismos ¿no se hacían frecuentes visitas durante congresos o fiestas de los respectivos movimientos nacionalistas?, ¿no esta-

ban los once de septiembre de Catalunya plagados de ikurriñas vascas, y el Día de la Patria Vasca con dispersas banderas de las siete estrellas verdes? Sin embargo, no respondía todo eso a una estrategia conjunta de los distintos movimientos de la izquierda nacionalista en el Estado español, sino a manifestaciones de carácter espontáneo. Y, por tensar incluso la cuerda, ¿acaso la LCR y el MC, teniendo su centro de operaciones en Madrid, no tendían frecuentes puentes hacia todos estos movimientos?. No obstante, nunca se elaboró desde ellos una política plena de acercamiento que fuese el contrapunto a lo que sí hicieron las distintas burguesías del Estado español. Nada de mayor calado que apoyos puntuales en el parlamento de algún diputado de ERC a la autodeterminación de Canarias, o de nuestro Fernando Sagaseta a la autodeterminación de los pueblos.

Los grupos armados, partidos y movimientos nacionalistas de izquierda son imposibles de entender si se pierden de vista los parámetros que he expuesto anteriormente. En mi opinión, el contexto histórico de los sesenta es clave para poder explicar todo el proceso subsiguiente. ETA surge de EGI, EGI del PNV, es verdad. Pero la primera ETA se siente más próxima de Frank Fanon que de Sabino Arana, del FLN que de la democracia-cristiana europea. Terra Lliure o la Crida a la Solidaritat son más próximos del extremismo de la izquierda post-sesentayonchista que de Cambó o Tarradellas. En la UPG o el EGPG han leído mucho más a Mao que a Castella. El MPAIAC, PCU, o UPC están más cerca de Krhuma, Lenin o Leonardo Boff, que de Secundino Delgado, Franchy y Roca o Gil Roldán. En conjunto, el nacionalismo de izquierdas de la transición, más que heredero de los nacionalismos históricos –aunque pueda tener punto de encuentros con él–, forma parte de la búsqueda de nuevas formas de representación política que entran en liza desde hace dos décadas, en la misma medida que la triada

de movimientos reivindicativos que nacen en aquellas fechas y que hoy nos resultan tan familiares: el ecologismo, el feminismo y el antimilitarismo.

De los elementos que resaltan o dan carácter de unidad –relativa, por supuesto– a estos movimientos nacionalistas hay que destacar la centralidad que adquiere en todos ellos el problema de la autodeterminación. Para unos podía ser sinónimo de independencia, para otros un ejercicio de soberanía, en cualquier caso un “derecho inalienable”.

Los nacionalismos asentaban su oferta estratégica en los modelos surgidos en las luchas de liberación nacional de la década del sesenta y del setenta, en el que el caso argelino tuvo un influjo bastante determinante. Partiendo de interpretaciones, de las realidades en las que se actuaban, como formaciones coloniales o naciones sin estado, se opinaba que las líneas básicas de salida de esas situaciones se encontraban en las formas de luchas desplegadas por este o aquel movimiento de liberación nacional, en esta o en aquella parte del planeta. Formas de lucha que no eran privativas de ningún grupo en concreto sino que estaban insertas en la esfera de reflexión del conjunto de los movimientos de liberación de la época.

Este modelo aspiraba a la consecución de un estado nacional al estilo de los imperantes en el capitalismo central, o en algunos casos a su variante oriental, en los países del socialismo real, o a aparatos de poder cuasi-estatales articulados en torno a estructuras confederales en las que se suponía que tenían que ser los propios pueblos quienes definiesen el alcance de esas alianzas confederales. Los modelos se realimentaban mutuamente, y por supuesto, más allá de las propias fronteras estatales. Hemos comentado el caso argelino, pero también hay que nombrar el irlandés, el corso, etc. Este influjo tenía su propia jerarquía dentro de los movimientos nacionalistas en España. Los vascos o los catala-

nes influenciaban a los canarios, pero a la inversa.

A pesar de todo ello, los modelos teóricos propuestos estaban inscritos en la idea de la reproducción de las estructuras políticas que pretendían cuestionar, a pesar de ser una manifestación de la crisis de estos. La construcción de aparatos estatales o cuasiestatales piramidales al estilo de los Estados Occidentales o del socialismo real o "imaginario", en definitiva, aparatos de corte liberal estructurados políticamente según la opción ideológica que se reclamase como acertada, derivada de los diferentes puntos de vista que mantenía cada grupo o movimiento nacionalista –comunistas y de tradición marxista por un lado, y socialdemócratas o de tradición no marxista por el otro–.

El segundo elemento que da cierta unidad a los nacionalismos de izquierda es su militancia antiimperialista. El abanico de posturas oscilaba entre el comunismo –ortodoxo y renovador en sus diferentes manifestaciones– y la socialdemocracia o socialismo de corte más o menos moderado. Pero en conjunto, se pretendía partir de unos posicionamientos que buscaban ser alternativos a la construcción capitalista que se verificaba en España y en el mundo en aquellas fechas. Los modelos que se tenían como referencia se hallaban en el conjunto de experiencias que las fuerzas populares habían desarrollado en diversas latitudes del planeta. El discurso imperante de la época hacía hincapié en el carácter progresista de las luchas anti-imperialistas y asemejaba sus situaciones, con distintos matices, más o menos radicalizados, a esa realidad.

Toda la fundamentación teórica y práctica, en la que se sustentó el movimiento revolucionario –o la mayoría de él–, desde la década de los sesenta en adelante, no fue capaz de dar una respuesta superadora a las condiciones que había generado el capitalismo, comenzando porque la propia dicotomía, que en aquellos tiem-

pos parecía real, de diferenciación del mundo en dos o tres categorías –primer mundo, segundo mundo, tercer mundo–, y cada una con su propia estrategia de lucha y de interpretación del proceso revolucionario, y sobre la que se sustentaba toda una concepción de acción política, se mostró finalmente como una línea incorrecta de análisis de la realidad.

El período revolucionario abierto en los sesenta fue liquidado prontamente, tan pronto como su opción fue emular las estructuras estatales presentadas como alternativas al capitalismo.

La versión revolucionaria de la crítica al capitalismo, hegemonizada por los partidos comunistas, o los frentes de carácter socialista tuvieron su apoyatura teórica y práctica en la dictadura del proletariado y en la construcción del Estado socialista como presumible estado de transición. Pero esa línea de actuación política ya había sido derrotada con la experiencia soviética y más tarde con la china.

A partir de ahí, el conocimiento histórico ha demostrado que la acción encaminada a la construcción estatal –aunque discursivamente se proclame socialista– termina siempre por devolver a la burguesía al puesto de mando. Más allá del discurso existían relaciones de identidad entre un modelo y otro, y éstas venían marcadas por el carácter netamente productivista en el que se asentaban ambos. Un productivismo que igualaba la naturaleza de la división del trabajo a nivel estatal e internacional en ambos sistemas –produciendo relaciones de intercambio desigual de manera estructural a nivel internacional, o lo que es lo mismo de explotación–; que producía contradicciones, de parecido alcance, entre el campo y la ciudad –las grandes urbes rodeadas de centros industriales que explotan al campo, no sólo son patrimonio del mundo capitalista–; que construía un monstruo burocrático de similares características, en el que el poder político es una maquinaria encargada de reproducirse a sí

misma, y un largo etc. de semejanzas estructurales que no es el caso examinar aquí.

El nacionalismo de izquierda está en el período 1975-1982 en el momento de mayor expansión. Las burguesías periféricas, a excepción de la vasca y la catalana –como clase estructurada políticamente– no se inscribe en el ámbito del nacionalismo, se encuentra muy cómodamente asentada en las formaciones políticas de la derecha tradicional española –esto es válido para el caso canario y gallego–. Pero por otro lado, hay que decir, también que el nacionalismo de izquierda fue un proyecto que no tuvo tiempo de desarrollarse plenamente y por lo tanto, su campo de acción se vio restringido tanto en el espacio como en el tiempo, dado que el periodo de inestabilidad que siguió a la muerte de Franco, se cerró con la llegada del PSOE al poder en octubre de 1982 y la puesta en práctica de un nuevo modelo de Estado que a pesar de los tira y afloja estuvo refrendado, con la postura comprometida que en torno a esa nueva distribución del poder sostuvieron las burguesías periféricas más pujantes –catalanas y vascas– y que eran las únicas que tenían capacidad real de mantener indefinidamente el periodo de desestabilización 1975-1982. Pero lo que nos interesa resaltar es que el nacionalismo de izquierda, en el período de la transición, sólo podía tener la definición que adoptó, debido a que se inscribía en una órbita política que pretendía ser una contestación al capitalismo.

Por esa razón, la tradición formativa de la militancia nacionalista de esa época, se realiza en el combate contra el último franquismo. En la mayoría de los casos, los militantes del nacionalismo de finales de los setenta habían adquirido su conciencia política a través de referencias marxistas o marxistizantes, eran *combatientes* del antifascismo y por lo tanto, pertenecían a toda esa tradición del movimiento político internacional que venía ejerciendo desde muchos años atrás. Se formaban políticamente

a través de la lectura y la discusión y consideraban su actividad política como un modo de vida, no sólo como forma estética –que también–, sino como compromiso con las clases oprimidas y explotadas.

Desde el punto de vista orgánico, pertenecían a formaciones políticas –o simpatizaban con ellas– que habían elaborado su discurso y su práctica –en el marco mundial– en la lucha por la democracia y el socialismo, interpretado tanto lo uno como lo otro de diversas formas. Pero básicamente, eran estructuras políticas que respondían a formas organizativas clásicas en el ámbito de la izquierda –PCE, PSUC, PCC, etc.–. Aparatos partidarios, más o menos burocratizados, dependiendo de la fuerza social del partido, enriquecidos en la tradición del *centralismo burocrático*, y del ordeno y mando de la dirección, aunque luego se disfrazase con un discurso democrático. Aunque bien es verdad, que aquí tendríamos que hacer la salvedad del caso vasco, en el que la influencia del PCE o partidos hermanos es menor, dado que hasta la formación de ETA en 1959, el PNV era el partido que hegemonizaba la resistencia al franquismo.

El compromiso social, sin embargo, que adquirieron estos grupos y partidos estaba sin duda motivado por el interés declarado de combatir el sistema capitalista, y el nacionalismo apareció en ese contexto como una forma óptima de aglutinamiento de las fuerzas sociales progresistas que estaban por esa labor. Esa era, además, la experiencia que parecía verificarse en otras latitudes, aunque lógicamente con características específicas en cada lugar. Desde la guerra del Vietnam, hasta la guerra argelina, desde Cuba hasta Irlanda del Norte, desde Euskadi hasta Nicaragua, desde Canarias hasta el Sáhara, el nacionalismo en los setenta jugó una baza anti-imperialista que se consideró válida en la lucha contra el capitalismo.

3- LO QUE QUEDA DEL PROYECTO NACIONALISTA

El nacionalismo de la derecha, que finalmente se ha impuesto desde el punto de vista político y social, se desvela como una fuerza claramente conservadora. Es una tendencia política que reclama como propio el denominado triunfo del mercado, y se inscribe objetiva y subjetivamente en la tendencia dominante del nacionalismo conservador que azota a Europa.

El nacionalismo de la derecha responde a una recomposición de fuerzas de las burguesías periféricas en el contexto del Estado español y de la Comunidad Europea y engloba en torno a sí los históricos intereses del conjunto de las clases dominantes.

El movimiento nacionalista de las derechas no está proyectado en el sentido de buscar formas liberadoras a los procesos de explotación —nacional, social, ecológico, político, etc.—, sino precisamente en su contrario, es decir, en el ejercicio por el mantenimiento del poder político y económico, etc., de la sociedad en que se proyectan.

Tras las experiencias de los años sesenta y setenta en torno a los problemas de las luchas nacionales, la historia ha demostrado, de diferentes maneras y con distinto alcance, que todos los movimientos de connotaciones —explícita o implícitamente— nacionalistas han sido hegemonizados por las fuerzas conservadoras, y cuando a éstas se les ha escapado el proceso por algún período de tiempo, sin embargo, han vuelto a imponer su hegemonía de forma clara y contundente. Desde esta perspectiva, el nacionalismo se muestra, entonces, como un movimiento que sólo puede aspirar a consolidar o reajustar el capitalismo en el territorio en el que se entabla la lucha, independientemente de que el proyecto nacionalista se etiquete, o efectivamente sea dirigido, por la derecha liberal, conservadora, los partidos socialdemócratas, socialistas o incluso comunistas. La tendencia a la construcción estatal, como ya alegamos

en otros trabajos¹², es una tarea histórica propia de la era del capitalismo. Las opciones políticas que pretendan transformar esa forma de articulación social tendrán que buscar concreciones políticas del poder distintas a las que representa el Estado, bien sea nacional o plurinacional.

En cualquier caso, se impone una deconstrucción de la trayectoria del movimiento nacionalista y de los objetivos políticos que persigue, lo que no significa que haya que tirar por la borda todo el bagaje histórico que representan estas formas de agrupación política. Ahora bien, es obvio que la crisis de los modelos organizativos en los que se ha sustentado la representación política, desde por lo menos la II Guerra Mundial en adelante, afecta también a los partidos y movimientos nacionalistas, sean estos de la tendencia que sean. ¿Qué queda después de la bancarrota del socialismo real y de la crisis del Estado del Bienestar? El triunfo, por lo menos, aparente, del liberalismo, es decir, una decantación de las relaciones de fuerza a favor de las corrientes de pensamiento liberal-conservadoras.

Si bien el despliegue pleno de las políticas del bienestar no alcanzan a España, por obvios motivos políticos, las manifestaciones de su crisis sí la afectan de lleno. La inflación, las crisis económicas, el aumento del paro y de la deuda pública ponen en cuestión el modelo de corte europeo que comienza a plasmarse en España tras el franquismo. Se llega tarde y mal. Cuando la socialdemocracia accede al poder en España, Reagan y Thatcher ya han comenzado la cruzada contra el Estado del Bienestar y acto seguido los conservadores en toda Europa van retornando a cada uno de sus gobiernos. En donde no lo hacen, caso español, los socialdemócratas ponen en práctica las políticas liberal-conservadoras, aunque añadiendo a ellas las manifestaciones más perversas del modelo keynesiano: alta burocratización de los aparatos de la administración —duplicando en

muchos casos funciones entre la administración central y las comunidades autónomas— con un notable grado de secuelas de corruptelas y otras formas de delincuencia de *cuello blanco*.

La socialdemocracia ha fundamentado su creencia política en la acción racionalizadora del Estado, y su proyecto partía de la consideración de que éste tendría que actuar como regulador de los *excesos del mercado*, por medio del aumento progresivo de la presión fiscal y de una redistribución equitativa de la riqueza. Desde esa concepción, el Estado jugaría un papel neutral en el juego de la libre concurrencia de los agentes económicos en el mercado. La relación de fuerza en la sociedad se dibujaría por medio de las elecciones parlamentarias o presidenciales cada cuatro años y en esos marcos institucionales se encontraría el centro, el equilibrio entre las exigencias de los bandos enfrentados: el capital y el trabajo¹³.

Sin embargo, el Estado se convirtió en patrón y, por lo tanto, su papel neutral quedó de esa forma en entredicho por la propia realidad. El planteamiento socialdemócrata quedó atrapado en su propia lógica y el *continuum* de las luchas de clases se lo reafirmó con contundencia cuando los propios sindicatos, también socialdemócratas, convocaron huelgas generales a gobiernos de su propio color. No me refiero sólo, ni mucho menos al 14D en el caso español, aunque también es válido, sino por ejemplo, la contestación que tuvo por parte de la clase obrera el compromiso histórico en Italia en la década de los setenta, el acuerdo alcanzado entre el PSF de Mitterrand con la patronal a comienzos de los ochenta, o la escalada en la conflictividad social que tiene lugar en el Estado español tras los Pactos de la Moncloa.

La corriente más radical de la socialdemocracia, actuante siempre desde posiciones opositoras, como la voz de la conciencia frente al pragmatismo liberal de sus compañeros de partido, teoriza la profun-

dización de la democracia política como la vía para alcanzar la democracia económica, y por extensión la social, pero fundamentando sus criterios, igualmente, sobre el fenecido *Welfare State*. Es, por tanto, la respuesta socialdemócrata en sus dos versiones, una estrecha visión excesivamente ideologizada y deudora de un modelo de crecimiento agotado.

El pragmatismo socialdemócrata se mueve, a partir del inicio de la crisis de los setenta, entre la presión de sus propias bases y las exigencias cada vez más agresivas de la patronal, pero sus políticas no encuentran ahora la solvencia de un sistema económico que los ha ido despojando de su vestimenta hasta mostrarlos completamente desnudos frente a la clase trabajadora, a la que no le pueden prometer ni las ventajas del Estado del Bienestar —pleno empleo o en su defecto protección al desempleo, asistencia sanitaria y educativa con criterios mínimos de calidad, vivienda, etc.— ni proponerles expectativas de futuro mínimamente razonables, que tengan en cuenta, además, la profunda transformación ocurrida desde el punto de vista sociológico, en el conjunto de los trabajadores, como consecuencia del desarrollo científico-técnico, y de los cambios habidos en el mundo de la producción.

El sindicalismo y los partidos políticos de la izquierda clásica, nacionalistas o no, actúan como marcos reivindicativos de los colectivos de la aristocracia obrera. La época del corporativismo ha pasado definitivamente a la historia y con ella las estructuras organizativas propias de su momento. El sindicalismo y los partidos no pueden ser por más tiempo el portavoz de intereses corporativos. La nueva organización, o tiene un carácter netamente social, cooperativo, o no forma parte del mundo de las reivindicaciones liberadoras de la explotación.

La Huelga General del 27-E nos puede ayudar a reflexionar sobre lo que venimos comentando. Independientemente del éxi-

to, en términos cuantitativos, que tuvo la huelga por lo que a su seguimiento se refiere, no debemos llevarnos a engaños a la hora de valorar el significado real que esa acción sindical y política tiene en la actualidad.

Los sujetos históricos que en estos momentos representan la avanzadilla de la lucha social y política no están insertos en el mundo del trabajo de *forma regular*, ni en consecuencia se sienten representados por las organizaciones de ese ámbito laboral.

Hoy, el trabajo en precario, las contrataciones temporales, los que se mueven en el ámbito de la economía sumergida, los subempleados, los parados, los excluidos, representan los sectores golpeados de forma más contundente por el capital. Son esos sectores del mundo del trabajo los que adolecen de estructuras orgánicas, de capacidad de movilización en los actuales marcos jurídicos y políticos, y los que, por supuesto, nunca están representados en las mesas de negociaciones, ni siquiera en esas huelgas generales de clases medias –Gutiérrez *dixit*– del estilo de las del 27-E.

En este sentido, el sindicalismo se encuentra atrapado en la lógica mortífera de la dialéctica. Es presa, igual que sus compañeros de viaje –socialdemócratas de variada tonalidad (PSOE, IU, ICAN, EA, ERC)– de un envolvente razonamiento que los lleva con contumacia repetida a derrota tras derrota. Esa maldita forma de pensar, elevada por Hegel a las más altas cúspides del poder del estado y del capital, tiene que ser quebrada, puesta fuera de la circulación por quienes pretendan asistir a la reorganización de espacios vitales de mayor libertad.

Las condiciones actuales de articulación social han dejado obsoletos los mecanismos de representación clásicos del mundo del fordismo. Ni los partidos políticos, ni los sindicatos –mucho menos las instituciones y aparatos del Estado–, son permeables hoy a las exigencias y reivindicaciones de los nuevos sujetos sociales. Al con-

trario, lo que acertadamente se ha denominado la «revolución conservadora» de la década pasada ha profundizado los mecanismos y las formas de actuación antidemocráticas.

En estos últimos quince años se ha asistido, en el mundo occidental, a un proceso creciente de monopolización del poder. Nuevos instrumentos de creación de subjetividades sociales han irrumpido en la frágil estabilidad de fuerzas establecida en estas sociedades después de la Segunda Guerra Mundial, quebrando por completo la dinámica de «equilibrio» sostenida hasta ese momento. Este fenómeno junto a la creciente mundialización de los procesos económicos, políticos, culturales, etc., que alejan cada vez más las tomas de decisiones del alcance de los ciudadanos, y de los aparatos de los que, en teoría, estos se dotaban para ejercer el control democrático, no pueden tener una respuesta de carácter nacionalista al estilo clásico, –es decir, la que pretende la reproducción de aparatos de poder fracasados en los Estados constituidos– sino, por el contrario, se tendrá que poner el énfasis –y esto es válido también para los partidos de carácter estatal– en la búsqueda de la profundización de la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas.

Frente a una concepción autoritaria clásica, o a la alternativa post-moderna de la nueva derecha, es preciso rescatar los valores democráticos de la Modernidad, y fundamentar sobre ellos la acción política actual. En este sentido, no es un trabajo en balde intentar arrancar a los partidos dominantes decisiones de diversa índole, desequilibrándolos e impidiendo así, su inmovilismo, tarea que no se presenta excesivamente dificultosa dada su creciente crisis de representatividad.

El intento por influir en la vida interna de los partidos ha de ir en la línea de una progresiva permeabilización por parte de estos a las exigencias de participación de los movimientos sociales, y hacia la aper-

tura de nuevos espacios de debate en los que estos estén insertos. En este sentido, es primordial exigir a los partidos políticos dominantes tomas de decisiones tales como: 1) Poner los canales de comunicación bajo las reglas de la democracia formal y de base; y 2) Colocar bajo los órganos de la democracia representativa las «presiones objetivas»¹⁴ que escapan al control de aquélla.¹⁵

NOTAS

- 1 Aguilera de Prat, C.R.: *Nacionalismo y Autonomías*, PPU, Barcelona, 1993, p.112.
 - 2 Letamendía, Francisco: *Historia del nacionalismo vasco y de ETA*, R&B, San Sebastián, 1994, Vol II, p.456.
 - 3 Etxezarreta, Miren (coord.): *La reestructuración del capitalismo en España 1970-1990*, Icaria-Fuhem, Madrid-Barcelona, 1991.
 - 4 Morales, José Luis y Celada, Juan: *La alternativa militar: El golpismo después de Franco*, Revolución, Madrid, 1981.
 - 5 Letamendía, Francisco: *op.cit.* p. 411.
 - 6 Negri, T.: *Fin de siglo*, Paidós/ICE, Barcelona, 1992, p.63.
 - 7 *Ibid.*
 - 8 *Ibid.*, p.64.
 - 9 Ya nos advierte sobre esto Poulantzas cuando apunta que el Estado no sólo nacionaliza los sectores no rentables para el capital, sino que interviene de forma decidida en sectores rentables y sobre todo de alcance estratégico. Véase del autor mencionado *Estado, poder y socialismo*, Siglo XXI, Madrid, 1979.
 - 10 Sobre esto se puede consultar Michael Hardt and Antonio Negri: *Labor of Dionysus: A critique of the State-Form*, University of Minnesota Press, 1994. También el trabajo de Toni Negri, *Marx beyond Marx: Lessons on the Grundrisse*, Automeia Press, New York, 1991.
 - 11 Castells, Manuel y Peter Hall, *Las tecnópolis del mundo: La formación de los complejos industriales del siglo XXI*, Alianza Editorial, Madrid, 1994, p. 27.
- El problema que se plantea aquí es doble y

En el caso que nos ocupa, tanto los partidos de carácter nacionalista, como los estatelistas, tendrán que adoptar sin más demora un enfoque determinado sobre esas problemáticas, en el supuesto, que efectivamente, estén decantados por frenar el ascenso de los comportamientos y actitudes autoritarios; en el supuesto, también, de que exista un compromiso de hondo calado democrático.

su respuesta también. dependerá de múltiples factores el que unas clases dirigentes se decanten por uno o por otro. En el caso canario, creo que la elección ya se ha realizado. La zona ZEC prima, sobre todo, la «renta de situación», lo que la vincula a los procesos de blanqueo de dinero y de especulación monetaria. El segundo requiere cualificación científico-técnica, es decir, universidades competentes e inversión estratégica a medio plazo. Es el modelo escogido para Cataluña.

En cualquier caso, es precisa la concurrencia de alguno de estos modelos para apuntalar el sector servicios, en nuestro caso a la industria turística, tanto si se pretende sostener el proyecto político autónomo, como si no. De lo contrario, como han verificado sobre el terreno Castells y Hall, las «zonas que permanezcan ancladas en actividades en recesión -sean éstas de la fabricación, la agricultura o los servicios de tipo antiguo y no competitivo- se convierten en ruinas industriales, habitadas por trabajadores en paro y dominadas por el descontento social y el deterioro ambiental». *Op. cit.*, p. 28

- 12 Gari Hayek, D.: *Historia del nacionalismo canario*, ed. Benchomo, 1992 y *Los fundamentos del nacionalismo canario*, ed. Benchomo, 1992.
- 13 Ocurre que el Centro, o lo que es lo mismo, el Orden, a pesar de quererlo mostrar como catalizador neutral es, sin embargo, el reproductor de las jerarquías y del mando. El Centro, que en la simbología política lo encarna el Estado -el Estado-Capital- no es equilibrador de nada. Es, por el contrario,

pura violencia contra todos. El orden no matura, sino subsume, engulle, vampiriza.

«El centro no sólo se limita a atrear hacia el los recursos que necesita para alimentar sus operaciones, sino que también extrae de su entorno las energías indispensables para su propia consolidación, su fortalecimiento y, sobre todo, su expansión. Todo lo que está en la órbita del centro tiene que rendirle tributo». Tomás Ibáñez, «Sísifo y el centro, o la constante creación del orden y del poder por parte de quienes lo cuestionamos», en *Archipiélago*, nº13, Barcelona, 1993, pp. 85-92.

En el Centro no se está, el Centro se es, por eso quien es poder es inmediatamente el Centro. Franco no era ni de derecha ni de izquierda, era el Centro; «El Centro: lo bueno de la izquierda y de la derecha- decía luego

Suárez», y el centro es el PSOE desde 1982. «El centro son siempre los que mandan. Una lucha de clases es una regla de juego tal que impone que un jugador gane siempre y el otro pierda siempre. En el mercado laboral, pierde el trabajador porque le falta el capital...» y, el capital es lo que permite ser centro, orden, poder.

La cita es de Jesús Ibáñez, «El centro del caos», en *Archipiélago*, nº13, Barcelona, 1993, pp. 14-26.

- 14 Las que se argumentan alegando su carácter transnacional y la naturaleza externa de su procedencia.
- 15 Para profundizar sobre este tipo de sugerencias ver *Viento Sur*, nº10, Julio-Agosto, 1993, específicamente el *dossier* titulado *El malestar democrático*.